

LOS que somos aficionados a la Historia no podemos evitar comparar algunos acontecimientos actuales con otros que influyeron decisivamente en la Segunda República. Lo que ha ocurrido en Pamplona y, por extensión, en el resto del País Vasco, evoca escenas como la quema de conventos de mayo de 1931 o los asesinatos de Casas Viejas. Evidentemente, el contexto es muy distinto, pero no es fácil evitar esa maléfica tendencia a la comparación, labor que no es ciertamente agradable.

Los sucesos de Pamplona y del País Vasco vienen a mostrarnos directamente que no es posible consolidar un régimen democrático si previamente no nos planteamos con todo realismo el problema de los aparatos represivos del Estado, que hemos heredado del franquismo. No se trata de la anécdota de que el jefe de la Policía Armada parezca tener concomitancias ideológicas con la extrema derecha. Tampoco que un "error técnico" provoque una espectacular e indudablemente prevista entrada de esas Fuerzas en la plaza de toros. Lo fundamental, lo que realmente afecta a la consolidación de la democracia es lo siguiente: a) que hay unidades de la Fuerza Pública mandadas por oficiales con ideología de extrema derecha; b) que estos oficiales son capaces de rebasar las directrices de un gobernador civil; c) que siguiendo los procedimientos del antiguo régimen, una vez iniciada su actuación las Fuerzas de Orden Público actúan como un ejército de ocupación; d) que el máximo responsable del orden público de la provincia, el gobernador civil, no se atreve a informar públicamente quién es el responsable de las descabelladas órdenes que encendieron el conflicto; e) que siguiendo asimismo los procedimientos del franquismo, el Gobierno ha sido incapaz de cesar al gobernador civil y al comandante de las Fuerzas de Orden Público.

Todo esto no es una anécdota. Es el producto de un plan trazado con sumo cuidado por los que esperan socavar una de las bases del régimen democrático: la tranquilidad pública. ¿Concomitancias con la extrema izquierda de ETA? Nadie lo puede saber, pero objetivamente col-

niciden, aunque la solución política sea distinta en cada caso.

La especificidad del cambio político desde la muerte de Franco ha hecho que los españoles olvidemos algunas cosas fundamentales. Se trata de un proceso político realizado por iniciativa de la fracción más dinámica del bloque en el poder —la oligarquía financiera—, que asumió muchos de los puntos en que se basaba

aparatos represivos del Estado. Mientras el Gobierno no vea claro este punto y mientras la izquierda mantenga un sospechoso silencio (¿quizá para evitar que surjan más obstáculos al proceso constituyente?) o reserve para la calle lo que no dice en el Congreso, todos colaboraremos de consuno en que la Constitución nazca tarada, pues difícilmente se va a poder aplicar un texto constitucional si el Go-

bierno y las instituciones no son capaces de controlar sus aparatos represivos.

Y si el Gobierno y la oposición (es decir, el ejecutivo y el legislativo) son incapaces de afrontar con toda su fuerza el problema, ¿cómo pedir al tercer poder, a los jueces, que inicien lo que otros no han sido capaces de realizar? ¿Han reparado Gobierno y oposición que incluso el artículo 13 de la Ley de Orden Público

DESESTABILIZACION POLITICA Y APARATOS REPRESIVOS DEL ESTADO

Javier García Fernández

(Profesor de Derecho Político. Miembro del Partido Comunista de España)

la ruptura democrática. Por eso la izquierda ha tenido que subirse al carro de la democracia sin poder imponer sus propias concepciones. Entre estas concepciones no estaba, evidentemente, el revanchismo, pues la idea de la reconciliación nacional ha cuajado bastante en toda la izquierda desde que la formuló el Partido Comunista. Pero no hay que confundir revanchismo con depuración de la extrema derecha. No es casualidad que muchos órganos represivos sigan en manos de la extrema derecha. En cierto modo es lógico: si no ha habido ruptura, algunos resortes claves del aparato represivo siguen incólumes, igual que en el franquismo. ¿Podemos olvidar que un inspector de Policía, citado a declarar en el sumario de los asesinatos de Atocha, está (o estaba) en la sección "antiterrorista" de Conesa? ¿Quién es capaz de explicar claramente las muertes que se producen en controles de carretera del País Vasco? ¿No ha reparado nadie en los efectos desestabilizadores que puede tener otra huelga de celo de la Policía? (y que conste que no estoy en contra de que estos funcionarios tengan la plenitud de derechos sindicales que tenemos los demás ciudadanos).

Pero el Gobierno y los partidos de la oposición prefieren callar y hacer la vista gorda, como si el consenso constitucional pudiera servir para algo si no se resuelve previamente el control democrático de los

franquista preceptúa que en lugar público la autoridad o sus agentes deberán hacer tres advertencias conminatorias antes de disolver a los perturbadores del orden? Si no se hicieron en la plaza de toros de Pamplona esas tres conminaciones, estamos ante una excelente pista que podrán seguir los jueces, sean civiles o militares, para dilucidar la responsabilidad delictiva de ciertos funcionarios.

Desde que se constituyó el Gobierno Suárez, ha habido —que se sepa— dos situaciones claramente desestabilizadoras: los asesinatos de Atocha y la legalización del Partido Comunista. Además de los agentes ejecutores, esas situaciones ocurrieron porque había nombres en la sombra que actuaron de promotores. Pero no se ha hecho nada para que los ciudadanos sepamos esos nombres. Si el Gobierno no tiene fuerza para evitar nuevas situaciones de este tipo, si la oposición no se atreve, en aras del consenso, a exigir que no se vuelvan a repetir situaciones semejantes, el trabajo laborioso y casi de artesanía desarrollado en torno a la Constitución no habrá servido para nada. La flamante Constitución será solamente un ramillete de buenas intenciones fácilmente transgredibles por cualquier funcionario nostálgico que no tiene inconveniente en ordenar que se dispare a matar. Por eso, en crisis como la que acaba de sufrir el País Vasco, el silencio, se convierte a la larga en un suicidio. ■